

NOTIFICACIONES

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA

A LA LICENCIADA [REDACTED] EN CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL DEL DIRECTOR NACIONAL DE MEDICAMENTOS Y A TRAVÉS DE [REDACTED]
[REDACTED], OFICIAL DE INFORMACIÓN

HAGO SABER: que en el procedimiento administrativo de apelación NUE 45-A-2020 (AG), el Instituto de Acceso a la Información Pública, con fecha 10 de septiembre de 2020, ha pronunciado la resolución que literalmente DICE:



NUE 45-A-2020 (AG)

[REDACTED] contra Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las nueve horas con once minutos del diez de septiembre de dos mil veinte.

Descripción del caso:

El presente procedimiento de apelación ha sido promovido por [REDACTED] [REDACTED], en adelante “el apelante” o “la parte apelante”, en contra de la resolución emitida por la oficial de información de la **Dirección Nacional de Medicamentos**, en adelante “DNM” o “ente obligado”, que denegó información consistente en:

- 1) La base legal bajo la cual fueron autorizadas por la DNM las áreas de fraccionamiento de alcohol en droguerías, en los años 2018, 2019 y 2020.
- 2) La base legal vigente en la actualidad, para que la DNM autorice áreas de fraccionamiento de alcohol en droguerías.
- 3) Informe de las droguerías autorizadas por la DNM con áreas de fraccionamiento de alcohol, de estas cuales y en qué fecha renovaron su anualidad año 2020.

En su resolución, la oficial de información resolvió dar respuesta al ciudadano, en el sentido que la información solicitada es inexistente.

Al respecto, el apelante manifestó su inconformidad con dicha resolución, argumentando en lo medular: a) que las licencias o autorizaciones a las actividades que pueden desenvolverse en los establecimientos farmacéuticos obedecen a actos administrativos favorables, y como tales, estos están investidos de requisitos constitutivos de todo acto, como la motivación, dentro de la cual debe hacerse relación no solo a los argumentos de hecho sino también de derecho, bajo los cuales se emite el acto, por lo que el mismo debe constar con una base legal habilitante para su emisión. Además, señala que como ya bien se ha pronunciado este Instituto en sus resoluciones, la información debe brindarse sin importar el período de gestión, pues la vigencia real y efectiva del derecho de acceso a la información pública, no depende del período de gestión de los funcionarios responsables de la generación, obtención, transformación o conservación de la información; b) que de conformidad a lo establecido en la LAIP, es obligación de los entes obligados poner a disposición de los ciudadanos el marco normativo bajo el cual rigen sus actuaciones, pues la administración pública está sujeta al principio constitucional de legalidad, y siendo el “fraccionamiento” actividades menores de fabricación o acondicionamiento al que puedan estar sometidos los medicamentos o insumos médicos, actividad que es regulada por la DNM, de tal forma que la misma está recogida y mencionada en la “Guía del Usuario de Trámites de Establecimientos Farmacéuticos”, marcada bajo la referencia CO2-RS-01-UJ-GUI01, versión 4; en razón de ello, el desempeño de tal regulación debe tener fundamento en alguna base legal, pues del resto de respuestas dadas por esa administración se evidencia que sí se han otorgado autorizaciones para el desarrollo de dicha actividad; y, c) que lo que solicita es un informe con fechas y detalle de las droguerías autorizadas y su fecha de renovación en el presente año; asimismo, considera que es información oficiosa que debe estar publicada en el portal de transparencia de cada institución sujeta a la LAIP; por lo que estima que existe una negativa del ente obligado de no entregar lo que se le está solicitando al haber otorgado respuestas evasivas.

El Instituto admitió la apelación y designó al Comisionado Andrés Gregori Rodríguez para instruir el procedimiento.

En el informe justificativo al que se refiere el Art. 88 de la LAIP, se ratificó lo expuesto por la oficial de información, en tanto el ente obligado expuso haber realizado las diligencias necesarias para atender los requerimientos del apelante, afirmando haber resuelto de manera concreta y coherente. Asimismo, agregaron lo siguiente: i) que los artículos 13 de la Ley de Medicamentos y 59 de su Reglamento de ejecución, definen que la droguería, es todo establecimiento que opera la importación, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos para la venta al mayoreo, lo cual no contempla un fraccionamiento de alcohol, por lo que las respuestas brindadas al apelante fueron enmarcadas en ese sentido, y confirman la inexistencia de base legal para ello; ii) que en virtud de lo anterior, afirman que no han otorgado autorización alguna para el fraccionamiento de alcohol en droguerías en el presente año, por no existir base legal; iii) que las autorizaciones otorgadas por esa Dirección en los años anteriores no contienen base legal en su parte motivacional; y v) que en virtud de la solicitud interpuesta por el ciudadano, informaron que han interpuesto aviso a la FGR por medio de escrito bajo la referencia 133-2020, en la que se hizo de conocimiento al Fiscal General de la República el posible cometimiento del delito de actos arbitrarios de conformidad al art. 320 del Código Penal, por parte de los anteriores Directores Nacionales de esa Dirección, relativos a la emisión de autorizaciones referentes al fraccionamiento de alcohol. Finalmente, realizaron ofrecimiento de prueba documental.

La audiencia oral se llevó a cabo en la fecha y hora señalada por medio de la plataforma “Meet” de Google, con la comparecencia del apoderado del apelante, licenciado [REDACTED] y el Director de la DNM, **Noé Geovanni García Iraheta**, a quien lo acompañó técnicamente su representante [REDACTED]

En la etapa de ofrecimiento de pruebas, la parte apelante ofreció como prueba documental: a) “Guía de Verificación de Buenas Prácticas del Almacenamiento o BPA para Droguerías”; b) “Guía para el Usuario de Trámites de Establecimientos Farmacéuticos, versión 04”, marcada con la referencia C02-RS-01-UN.GUI 01, emitida el día ocho de junio de dos mil dieciocho; c) copia de “Acta de Inspección de Buenas Prácticas”, realizada por personeros de la DNM el día dos de diciembre del año dos mil diecinueve; d) copia del “Acuerdo 21.19 de Sesión Ordinaria número 082019”, celebrada el día cuatro de abril de dos mil diecinueve, acta que corre agregada al expediente y que fue propuesta como prueba por

el ente obligado; y, e) publicación de la Organización Panamericana de la Salud, año 2017: Propuesta de Plan Básico de Educación Farmacéutica y Competencias del Farmacéutico para la Práctica Profesional, Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica (CPEFF).

La documentación ofertada por el ente obligado consiste en: “a) los documentos que constan en el “expediente bajo referencia SAIP_2020_022”, con lo que pretenden comprobar la realización de todos los actos realizados para diligenciar en legal forma la solicitud de acceso a la información que ahora se impugna, misma que fue tramitada conforme a las disposiciones legales y a lo requerido por el apelante; y b) copia de resolución emitida a las trece horas con cincuenta minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve, por el licenciado [REDACTED] [...], con la que pretende probar la falta de base legal alegada en las respuestas otorgadas al apelante.

Luego de correr traslado a ambas partes y escuchar los argumentos expuestos por cada una de ellas, el Pleno procedió a deliberar sobre la admisibilidad de la misma, teniendo en cuenta los criterios de pertinencia y utilidad de la prueba, de conformidad a los artículos 318 y 319 del Código Procesal Civil y Mercantil; y, finalmente, resolvió admitir la documentación ofrecida como prueba por ambas partes, a excepción del documento: “Propuesta de Plan Básico de Educación Farmacéutica y Competencias del Farmacéutico para la Práctica Profesional, Conferencia Panamericana de Educación Farmacéutica (CPEFF)”, ofertado por la parte apelante, de conformidad al Artículo trescientos dieciocho y trescientos veinte ambos del Código Procesal Civil y Mercantil, expresando los motivos de su decisión en dicho acto.

En la etapa de alegatos, ambas partes ratificaron sus posturas, y no se realizó a ninguna de las partes preguntas de carácter aclaratorio por parte del Pleno.

Análisis del caso:

Para el análisis que nos concierne, este Instituto ha determinado su pronunciamiento respecto a la existencia o no de la información solicitada por la parte apelante. En este contexto, el examen jurídico del caso seguirá el orden lógico siguiente: **(I)** Principio de máxima publicidad y sus efectos; **(II)** la información inexistente y sus presupuestos; **(III)**

análisis del caso en concreto en torno a la valoración de la prueba aportada por las partes en el presente procedimiento, y, (IV) consideraciones finales.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información, contenido en el Artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones”².

En ese orden, el Art. 4 letra “a” de la LAIP establece la máxima publicidad como principio rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de excepciones. Entonces, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la Corte IDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes

¹ Corte I.D.H., *Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile*. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil*. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII- O/08), *Principios sobre el derecho de acceso a la información*, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI- RES_147_LXXIII- O- 08.p

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

En relación a las limitaciones al DAIP se ha pronunciado la “Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión”, en la que se efectuó una formulación sintética de los requisitos que deben cumplir las limitaciones al derecho de acceso a la información: que “el derecho de acceso a la información deberá estar sujeto a un sistema restringido de excepciones cuidadosamente adaptado para proteger los intereses públicos y privados preponderantes, incluida la privacidad”, **que “las excepciones se aplicarán solamente cuando exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y cuando ese daño sea mayor que el interés público en general de tener acceso a la información”**, y que “la autoridad pública que procure denegar el acceso debe demostrar que la información está amparada por el sistema de excepciones”⁸.

II. Para el caso en comento, la **DNM** alega que la información solicitada por el apelante es inexistente.

La información inexistente se constituye, básicamente, cuando esta no se encuentra en los archivos de la unidad administrativa que debería poseerla –Art. 73 de la LAIP–. No obstante, tal ausencia debe ser corroborada y comprobada por la persona que ejerce las funciones de oficial de información, tomando las medidas pertinentes para localizar lo solicitado; ya que la mera alegación de no localización resulta insuficiente para declarar su inexistencia.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quiénes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoría especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem

⁸ Declaración Conjunta del Relator Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), y el Relator Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de Expresión (2004). Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/documentos_basicos/declaraciones.asp

Sobre ello, este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito; y c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción. En este caso deberá verificarse si esta se realizó de conformidad por las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria.⁹

En este contexto, corresponde estudiar la primera causal de inexistencia, puesto que sería la aplicable al caso en razón de las alegaciones hechas por el **DNM**, ya que prácticamente, se está argumentando que la información no ha sido generada.

Es atinente señalar, que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentre en los archivos de la autoridad – es decir, se trata de una cuestión de hecho –; no obstante que la dependencia o autoridad cuente con las facultades para poseer dicha información. En este sentido, es de señalar que la inexistencia es un concepto que se atribuye a la información solicitada.¹⁰

Además, en resoluciones emitidas por este Instituto¹¹, se han tomado como base los **criterios emitidos por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)**, y en relación a la inexistencia de la información ha establecido que: “se deberá fundar y motivar que la información solicitada no existe, y para ellos, se tiene que acreditar que se realizó una búsqueda exhaustiva en los archivos materiales y en su caso, digitales consignando los requisitos que den certeza de que la búsqueda fue realizada de manera minuciosa, tales como: i) que se hizo llegar la solicitud de acceso a todas las áreas competentes que pudieran contar con la información requerida, con el propósito de que en su caso la localizaran y manifestaran si se encontraba disponible; ii) que se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información y que estas fueron las adecuadas para atender el caso concreto; iii) que el criterio de búsqueda utilizado fue el adecuado: amplio y extensivo (es decir, no restrictivo);

⁹ Resolución definitiva IAIP 39-A-2013, emitida el 28 de octubre de 2013.

¹⁰ Criterio /00015-09, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de México.

¹¹ Resolución definitiva IAIP 143-A-2017, emitida el 11 de diciembre de 2017.

iv) que de la búsqueda efectuada no se localizaron documentos o información que den cuenta de lo solicitado; y, v) la precisión, en su caso, de que se procedió a la destrucción de la información por cuestiones de la vida útil, en los términos de la ley de que se trate. Cuando posterior al análisis de la inexistencia de la información, se determine que la misma debería de existir en virtud de que deriva del ejercicio de facultades, competencias o atribuciones de la autoridad (ente obligado) esta deberá generarse o reponerse en los caso que sea posible”.

Bajo esa lógica, la forma idónea para verificar y comprobar que efectivamente no existe en sus registros la información que les fue solicitada, es a través de las diligencias de búsqueda que debió realizar el oficial de información para localizar la información en las unidades administrativas que pudieran tener en su poder tal información.

En ese sentido, los entes obligados **no deben utilizar los criterios de inexistencia de información como un límite al derecho de acceso a la información pública (DAIP)** de las personas; pues dicha inexistencia, para ser declarada, debe estar debidamente fundamentada, debiendo demostrar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción, según sea el caso.

III) Corresponde ahora valorar la documentación que obra en el expediente y la ofrecida como prueba por ambas partes, a efecto de determinar si la información solicitada es inexistente o no:

A. Se admitió una serie de elementos probatorios ofrecidos por la parte apelante, con la que pretende probar, en lo medular, que sí se ha otorgado este tipo de licencias de fraccionamiento de alcohol a Droguerías, que existe normativa para fiscalizar su funcionamiento, y, que si se ha aprobado este tipo de normativa es porque debe haber base legal. Al respecto, visto y analizado el contenido de dicha documentación y valorado que ha sido conforme a las reglas de la prueba tasada (art. 106 inciso tercero de la LPA), se tiene por acreditado lo siguiente:

1. En relación al elemento “Guía de Verificación de Buenas Prácticas del Almacenamiento o BPA para Droguerías”: en esta guía se consigna un apartado denominado “pesado de materias primas”, seguido de una lista de condiciones o requisitos que debe cumplir la Droguería.

De lo anterior, se tiene por acreditado que en efecto, la DNM utiliza este formulario para evaluar el cumplimiento de estos requisitos por parte de la Droguería que esté siendo fiscalizada o inspeccionada, por lo que, la DNM sí concede este tipo de licencia a Droguerías.

2. “Guía para el Usuario de Trámites de Establecimientos Farmacéuticos, versión 04”, marcada con la referencia C02-RS-01-UN.GUI 01, emitida el día ocho de junio de dos mil dieciocho: este documento detalla el procedimiento que deben seguir los usuarios para realizar los trámites que es competencia de aprobación de la DNM. En la página 29 de la referida guía, constan los requisitos que deben cumplir las Droguerías para obtener su licencia para el fraccionamiento de alcohol; asimismo, en la página 6 del mismo documento, se establece que la base legal de la misma es “la Ley de Medicamentos, Reglamento General de la Ley de Medicamentos y el Decreto 417 – Derechos por Servicios y Licencias para los establecimientos de salud aplicables en la Dirección Nacional de Medicamentos”. De lo anterior, se ha logrado acreditar que el licenciamiento de fraccionamiento de alcohol para Droguerías sí es otorgado por la DNM; empero, no se detalla los artículos específicos en los cuales fundamentan la emisión de esta normativa ni para ninguno de los requisitos y procedimientos contenidos en ella.
3. Copia del “Acta de Inspección de Buenas Prácticas”, realizada por personeros de la DNM el día dos de diciembre del año dos mil diecinueve: de esta acta se advierte claramente la existencia de una Droguería a la cual se le ha autorizado el fraccionamiento de Alcohol, por lo que en efecto, se acredita que ha habido autorizaciones de este tipo.
4. Copia del “Acuerdo 21.19 de Sesión Ordinaria número 082019”, celebrada el día cuatro de abril de dos mil diecinueve, acta que corre agregada al expediente que fue propuesto como prueba por el ente obligado: al respecto, esta acta si bien corre agregada al expediente, esta no fue ofrecida como prueba por el ente obligado, sino que forma parte de los anexos del escrito de aviso que dicho ente remitió a la Fiscalía General de la República, como fundamento a lo expuesto en el informe de Ley rendido. Aclarado lo anterior, la parte apelante si la ofreció como prueba, y de la misma se puede constatar que la DNM aprobó la una serie de normativa en

cumplimiento de la Ley de Medicamentos y su Reglamento, entre la que figura la “Guía de Verificación de Buenas Prácticas de Almacenamiento, Distribución y Transporte”, de aplicación a los establecimientos autorizados por la DNM.

En tal sentido, con base a lo anterior, el ente obligado ha logrado acreditar que la DNM ha emitido autorizaciones para el fraccionamiento de alcohol a Droguerías; argumento que confirmó el Director de Medicamentos durante la audiencia oral del caso y en su informe.

B. En relación a la DNM, al verificar minuciosamente el expediente administrativo bajo referencia SAIP-2020-022, remitido por la oficial de información de la DNM –mismo que fue ofrecido como prueba por el ente obligado – se ha constatado que la referida oficial realizó las gestiones para la obtención del requerimiento con la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes de la DNM, ante lo cual, el Jefe de dicha Unidad respondió mediante el memorándum referencia No. UREP/09-2020 (folio 000000008) que: *i) no existe base legal para el fraccionamiento de alcohol en droguerías; ii) se desconoce la base legal utilizada por las autoridades administrativas anteriores para conceder dicha licencia a las droguerías; iii) que un establecimiento farmacéutico debidamente autorizado mantiene vigente su licencia de funcionamiento siempre y cuando paguen su anualidad a tiempo, la cual se hace en línea, y en virtud de ello, no es un trámite que deben realizar cada año, basta con efectuar dicho pago a tiempo para mantenerla; lo cual es aplicable a las droguerías autorizadas por la administración anterior para fraccionar alcohol; y iv) que a la fecha de emisión de dicho memorándum, el Jefe de la Unidad de Registro de Establecimientos y Poderes de la DNM, afirmó que ninguna de las droguerías autorizadas por las autoridades administrativas anteriores habían renovado su licencia anual de funcionamiento. Aunado a lo anterior, no consta ninguna otra diligencia de búsqueda en dicho expediente.*

Luego de recibido dicho memorándum, la oficial de información emitió la resolución que ahora se impugna, transcribiendo lo informado en el memorándum No. UREP/09-2020.

En ese orden, dicho argumento fue ratificado en el informe de ley rendido por el entonces Director Nacional de Medicamentos Mario Meléndez Montano, en donde ratifica la resolución de la oficial de información, señalando que el Art. 13 de la Ley de Medicamentos no permite el fraccionamiento de alcohol en droguerías, por lo que confirmó la inexistencia base legal para otorgar dicha licencia a las droguerías y que las autorizaciones

otorgadas por las autoridades anteriores no mencionan la base legal que les motivó para ello. Además, señaló que en virtud de la solicitud interpuesta por el apelante y en razón de los hallazgos, dieron aviso a la FGR por medio de escrito bajo la referencia 133-2020 y documentación anexa (folios 23 al 50), en la que se hizo de conocimiento del Fiscal General de la República el posible cometimiento del delito de actos arbitrarios de conformidad al art. 320 del Código Penal, por parte de los anteriores Directores Nacionales de esa Dirección, relativos a la emisión de autorizaciones referentes al fraccionamiento de alcohol. En dicho escrito de aviso, se mencionan las droguerías que fueron autorizadas por las autoridades administrativas anteriores de dicho ente.

En esa misma línea, durante la audiencia oral del caso, la parte apelante hizo mención al Acta número 13, misma en la que, de acuerdo a lo expuesto en el informe de ley rendido por el ente, se concedió una licencia de fraccionamiento de alcohol a una droguería, ante lo cual, el actual Director Nacional de Medicamentos, Noé García, confirmó que la misma no está publicada en el portal en virtud de formar parte del proceso penal incoado, de igual forma, no consta en el presente expediente.

No obstante, se admitió como elemento probatorio ofrecido en el referido informe, **“la resolución de las trece horas y cincuenta minutos del día veinte de junio de dos mil diecinueve”** (folio 51), emitida por [REDACTED] quien en ese momento la suscribió como Jefe de la Unidad Jurídica Ad-Honorem, de la que se puede evidenciar: *que de acuerdo al acta de la sesión ordinaria número 132019, se concede la modificación de infraestructura de establecimiento por la autorización de área de fraccionamiento de alcohol a la Droguería Medicrópolis, ordenando la correspondiente anotación en la inscripción número E01D0332 del libro respectivo y la extensión de la certificación al interesado*. En ese sentido, se tiene por establecido que dicha resolución no consigna ni invoca la base legal para conceder este tipo de licencia a droguerías.

Luego, la representación de la DNM, con base a los argumentos planteados durante la audiencia oral del caso, ratificó la misma postura, en tanto no existe una base legal actual para otorgar licencia para el fraccionamiento de alcohol a Droguerías, así como tampoco se refleja, en la documentación que concede dichos actos favorables, base legal alguna que fundamente dichas autorizaciones realizadas por las autoridades administrativas de ese entonces.

IV. Expuesto lo anterior, a criterio de este Instituto, la parte apelante logró acreditar que, en efecto, la DNM sí ha otorgado licencias de fraccionamiento de alcohol a Droguerías, siendo esta una práctica regulada en normativa emitida por dicho ente obligado.

Ahora, en relación al ente obligado, se tienen por acreditada la no existencia de base legal para autorizar el fraccionamiento de alcohol a Droguerías, esto es, la falta de regulación en la Ley de Medicamentos para autorizar dicha práctica, puesto que el Art. 13 de dicha ley ni ningún otro artículo lo regula. Por tanto, en relación a los requerimientos uno y dos del objeto de controversia, es procedente confirmar la inexistencia de la misma, por lo que el ente obligado deberá emitir la respectiva “acta de inexistencia” de conformidad con el Art. 73 de la LAIP, la cual deberá ser remitida al apelante y deberá constar en el expediente administrativo SAIP_2020_022.

No obstante lo anterior, en relación al requerimiento 3 consistente en **el informe de las droguerías autorizadas por la DNM con áreas de fraccionamiento de alcohol, de estas cuales y en qué fecha renovaron su anualidad año 2020**, la postura inicial del ente obligado en la resolución impugnada es que dicha información no existía porque la ley “no lo regula”. Sin embargo, de acuerdo a lo expuesto por la representación del ente obligado, tanto en el informe de ley como en la audiencia oral del caso, la solicitud de información interpuesta por el apelante les motivó a realizar una búsqueda en sus archivos de esta información, lo cual desembocó en indicios del cometimiento de una conducta penal por parte de las autoridades anteriores, pues evidenciaron que sí existe documentación que respalda estas autorizaciones. Asimismo, en la nota 133-2020 por medio de la cual se dio aviso a la FGR (folios 23 al 26), así como en la documentación anexa (concretamente a folio 42) consta la lista de nombres de las Droguerías que cuentan con esta licencia. En consecuencia, este Instituto estima que es posible entregarle al ciudadano [REDACTED] el informe solicitado, indicando cuáles de esas Droguerías habían renovado su anualidad a la fecha en que el apelante interpuso su solicitud de información. Lo anterior, en virtud del principio de máxima publicidad regulado en el art. 4 letra “a” de la LAIP.

Decisión del caso

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y con base a los Artículos 94, 96 letra “d” y 102 de la LAIP, este Instituto **resuelve**:

a) Modificar la resolución emitida por la oficial de información de la **Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)**, de fecha 12 de febrero de 2020, por los motivos expuestos en la presente resolución.

b) Ordenar al titular o máxima autoridad de la **Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)**, que por medio de su oficial de información, en el plazo de **tres días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución, entregue a [REDACTED] el acta de inexistencia respecto de “la base legal bajo la cual fueron autorizadas por la DNM las áreas de fraccionamiento de alcohol en droguerías, en los años 2018, 2019 y 2020, y, la base legal vigente en la actualidad, para que la DNM autorice áreas de fraccionamiento de alcohol en droguerías”; de conformidad al Art. 73 de la LAIP y a lo expuesto en la presente resolución.

c) Ordenar al titular o máxima autoridad de la **Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)**, que por medio de su oficial de información, dentro del mismo plazo concedido en el literal “b” de esta parte resolutive, entregue a [REDACTED] el “Informe de las droguerías autorizadas por la DNM con áreas de fraccionamiento de alcohol, de estas cuales y en qué fecha renovaron su anualidad año 2020”, de conformidad a lo establecido en el romano “IV” de la presente resolución.

d) Requerir al titular o máxima autoridad de la **Dirección Nacional de Medicamentos (DNM)**, que en el plazo de **veinticuatro horas**, luego de fenecido el plazo estipulado en la letra “b)” de esta parte resolutive, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de las obligaciones contenidas en los literales “b” y “c” de esta parte resolutive. Este informe deberá ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) Hacer saber a las partes, que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede, pues con esta resolución queda agotada la vía administrativa de conformidad al Art. 131 de la LPA, quedando expedito el derecho de acudir a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, si así se considerase necesario.

e) Remitir el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto para que verifique la ejecución de esta resolución.

Notifíquese.-

Página 14 de 14